

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

#### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

#### SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022)

Cumplido el traslado correspondiente, se procede a dictar la sentencia en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MARIA VICTORIA PAREJA BURITICÁ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (Radicado 05001-31-05-015-2019-00319-01).

### ANTECEDENTES

Pretende la demandante, previa declaración de la ineficacia o nulidad del traslado al Régimen de Ahorro Individual, la cual fue inicialmente a la AFP Protección S.A., y posteriormente a la AFP Porvenir S.A., se disponga que la afiliación válida la tiene con el Régimen de Prima Media que administra Colpensiones; como consecuencia que se ordene la devolución del dinero existente en la cuenta de ahorro individual, incluyendo rendimientos, sin descuento alguno; que se ordene a Colpensiones los reciba y a que reactive la afiliación considerando todas las semanas cotizadas al RAIS; y por último, que se condene en costas a las demandadas.

Como sustento de sus pretensiones manifiesta sucintamente lo siguiente:

Nació el 22 de febrero de 1961; se afilió por primera vez al Instituto de Seguros Sociales en febrero de 1983 y permaneció allí hasta que se trasladó al RAIS, AFP Protección S.A.; luego, dentro del mismo régimen, se trasladó a Porvenir S.A., AFP en la cual permanece; para estos traslados no recibió una información clara, precisa, concreta y suficiente por parte de los asesores correspondientes; no se le informó sobre las ventajas y desventajas de los regímenes pensionales, de los riesgos, del capital que tenía que reunir para tener derecho a la pensión de vejez, de los rendimientos y de los bonos pensionales; agrega que solicitó el traslado a las demandadas, pero no obtuvo respuesta favorable.

Colpensiones como entidad demandada aportó respuesta oportuna al escrito inicial. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones, bajo el argumento que las pretensiones formuladas carecen de fundamentación fáctica, legal y probatoria. Aceptó los hechos que tienen respaldo documental, especialmente la edad, la afiliación a la entidad y el traslado de régimen; de los demás, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: improcedencia de declarar la ineficacia o la nulidad de la afiliación al RAIS, devolución de aportes debidamente indexados, buena fe y prescripción, entre otras.

De igual manera Porvenir S.A. dio contestación a la demanda en el plazo concedido. Se opuso a la prosperidad de todo lo pedido, exponiendo para el efecto las razones de hecho y de derecho que estimó pertinentes. Frente a los hechos de la demanda, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Afirmó que el traslado inicial de régimen, se había dado con Protección S.A. en el año 1997. Como excepciones de mérito propuso las de prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, enriquecimiento sin causa, etc.

Por lo expuesto por la anterior administradora, la juez de conocimiento vinculó al proceso a Protección S.A. mediante auto del 11 de septiembre de 2019 (Exp. Digital, pág. 227, archivo 03). Esta AFP una vez notificada arrió dentro del término legal la respuesta a la demanda. Aceptó la edad de la demandante y

que efectivamente ésta se había trasladado a la entidad en el año 1997, pero que se le había brindado toda la información que exigía la ley para tal momento. De los demás hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Se opuso a todo lo pedido. Como excepciones propuso las de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, buena fe y aprovechamiento indebido de los recursos públicos, ente otras.

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 21 de octubre de 2021, decidió la controversia así:

**PRIMERO: DECLARAR** la ineficacia del traslado de la señora MARIA VICTORIA PAREJA BURITICA, identificada con la cedula de ciudadanía 42.755.703, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad en la AFP **PROTECCIÓN S.A.** representada legalmente por Juan David Correa Solórzano, o quien haga sus veces **Y PORVENIR S.A.** representada legalmente por MIGUEL LAGARCHA MARTINEZ, o quien haga sus veces.

**SEGUNDO: CONDENAR** a **PROTECCIÓN S.A y PORVENIR S.A.**, a trasladar a **COLPENSIONES**, representada por Juan Miguel Villa Lora o quien haga sus veces, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de ésta providencia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la señora MARIA VICTORIA PAREJA BURITICA más los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que dichas sumas de dinero estuvieron en poder de las administradoras, valores que deberán trasladarse respectivamente indexados.

**TERCERO: CONDENAR** a **COLPENSIONES** a recibir las anteriores sumas de dinero, y a activar la afiliación de la señora MARIA VICTORIA PAREJA BURITICA, en el régimen de prima media con prestación definida de forma permanente y sin solución de continuidad.

**CUARTO: DECLARAR** no probada la excepción de prescripción conforme lo indicado en la parte considerativa de esta sentencia y las demás formuladas por las codemandadas, quedan implícitamente resueltas con lo determinado.

**QUINTO:** En el evento de que esta decisión no sea APELADA por **COLPENSIONES** se ordena el envío del proceso al Honorable Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral, para que surta el grado jurisdiccional de CONSULTA, artículo 69 del C.P.T. y de la S.S. modificado por el artículo 14 Ley 1149 de 2007.

***SEXTO:*** Las costas serán asumidas por PORVENIR y PROTECCION S.A., para lo cual se fijan las agencias en derecho a favor de la demandante en la suma de **\$1.817.052**, distribuidos en **\$908.526**, que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021 a cargo de cada una de las demandadas.

Por no estar de acuerdo con la decisión, interpusieron recurso de apelación las apoderadas de Protección S.A., Porvenir S.A. y Colpensiones. Las dos primeras presentan inconformidad frente a las sumas que deben devolver por concepto de gastos de administración y seguros previsionales, en tanto consideran que la ley 100 de 1993, art. 20, ordenaba este proceder, a más de que se encuentran en manos de terceras empresas y cumplieron con su objetivo. La de Porvenir solicita que se revoque la condena que se hizo en materia de costas. Por su parte, la de Colpensiones solicita que se revoque en su integridad el fallo dictado, pues considera que la ineficacia no debe prosperar, porque no se demostró vicio en el consentimiento, la actora no se encontraba en el régimen de transición y, por último, la permanencia en el régimen de ahorro individual de la demandante hace concluir que su deseo era permanecer en éste.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

## CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por las apoderadas recurrentes, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellas condenas u órdenes impuestas a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones- que no fueron objeto de apelación, serán estudiadas por la vía de la consulta (art. 69 del C.P. del T. y de la S.S.), de conformidad con el criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de

la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, rads. 34552 y 51237, y más recientemente por la sentencia de tutela SLT7382-2015 (Rad. 40200).

Fuera de toda discusión, por existir plena prueba de ello, está que la demandante nació el 22 de febrero de 1961(Exp. Digital, pág. 27, arch. 01); que se afilió al RPM, antes ISS hoy Colpensiones, el 25 de febrero de 1983 (Exp. Digital, pág. 29, arch. 01); que se trasladó al régimen de Ahorro individual el 11 de agosto de 1997, siendo la AFP Protección S.A. (Exp. Digital, pág. 48, arch. 12); luego, dentro del mismo RAIS, se trasladó a Colpatria, hoy Porvenir S.A., el 6 de abril de 1999 (Exp. Digital, pág. 37, arch. 03), AFP a la cual se encuentra actualmente afiliada.

Partiendo entonces de lo que debe estudiarse por los recursos de apelación interpuestos y por el grado de la consulta en favor de Colpensiones, del contexto de los hechos y pretensiones de la demanda, y por supuesto de lo decidido, lo primero a esclarecer es si el traslado INICIAL de la demandante del RPMPD al RAIS fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, analizar si hay lugar o no a la devolución de aportes, rendimientos y demás ítems. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad de la accionante al momento de trasladarse del RPMPD al RAIS estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica.

Para estos fines, **y dado el poder vinculante de la jurisprudencia de las altas Cortes**, entre otras razones porque una de sus funciones esenciales es la de velar por la unidad e integridad del ordenamiento jurídico (art. 86 del CPTSS y 333 del CGP), criterio que ha destacado la Corte Constitucional en muchas de sus decisiones (véase entre otras la C 539 de 2011 y la SU 354 de 2017), la Sala estima del caso hacer referencia textual a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el 8 de mayo de 2019 (SL1688-2019, Rad. 68838, ratificada, entre otras, en las sentencias SL1741-2021, SL1743-2021 y SL1942-2021), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, además de una adecuada sustentación, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de traslados de régimen pensional por falta de una debida información, las consecuencias de

la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia y las reasesorías que se realizan con posterioridad al traslado inicial, entre otros, **y que le dan respuesta satisfactoria, de manera directa o indirecta a los distintos puntos que habrán de estudiarse en esta providencia, en especial al de determinar si la decisión del fallador de primer grado puede o no avalarse.** Sobre el deber de información, en ésta quedó dicho:

*El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:*

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales Y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición V la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regimenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto Con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

**1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible**

*Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.*

*Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.*

*Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.*

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

**2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado**

*Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.*

*La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber*

*de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.*

*Sobre el particular, en la sentencia CSJ SI. 19447-2017 la Sala explicó:*

*Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».*

*Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario[...].*

*De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.*

*Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SI. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.*



*Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.*

En materia de carga de la prueba del deber de información, anotó:

*En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.*

*Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.*

Y por último, en cuanto al alcance de la ausencia del deber de información y de los nulos efectos que pueden generar las reasesorías posteriores, quedó dicho:

*“Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.*

...

*Ahora, si bien la AFP brindó a la actora una reasesoría el 26 de noviembre de 2003, en virtud de la cual se concluyó la inconveniencia de continuar en Protección S.A., la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones:*

*En primer término, porque el traslado al RAIS implicó la pérdida de los beneficios derivados de la transición al no contar la demandante con 15 años de cotización o servicios a 1.º de abril de 1994. Es decir, así se hubiese trasladado la demandante al día siguiente de la reasesoría, de todas formas ya había perdido la transición.*

*En segundo lugar, porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.*

*Por otro lado, no es de recibo el planteo de Protección S.A., cuando sostiene que una vez realizó la reasesoría, Myriam Arroyave Henao no mostró interés en la ineficacia de la vinculación al RAIS, al conservar su status de afiliada durante un tiempo, Se dice lo anterior ya que la sugerencia de Protección S.A. de regresar al RPMPD, se produjo el 26 de noviembre de 2003, y el formulario para la nueva afiliación al ISS se diligenció el 14 de enero de 2004 (f.º 97), es decir, la interesada no dejó transcurrir dos meses desde que recibió asesoría. Por lo demás, este lapso es razonable, pues dada la relevancia de esta determinación, era natural que la accionante se tomara un tiempo de reflexión, buscara información y consejo profesional para, finalmente, adoptar su elección.*

Con sustento en estos presupuestos, esta Colegiatura comparte la decisión proferida por la *a quo* en este aspecto de la ineficacia, de ahí que habrá de confirmarse el punto, pues basta la mera ausencia de información al afiliado, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional, situación que fue exactamente la que ocurrió en el presente caso; a la Sala no le queda la menor duda que la demandada, en este caso, Protección S. A., AFP inicial, al no haber arrimado al proceso prueba idónea y completa de la información que se le debió de haber brindado a la señora Pareja Buritica en el traslado que realizó en el año 1997, y no inferirse ésta del interrogatorio de parte que se le formuló, la consecuencia no puede ser otra diferente a la de declarar ineficaz tal acto y, por tanto, tener como vinculación válida la que tenía con el Régimen de Prima Media con Prestación definida. Sobra anotar que la voluntad de afiliación de que da cuenta el documento de vinculación a que en párrafos anteriores se hizo

referencia, ninguna fuerza demostrativa tiene para el efecto, por las razones que precedentemente quedan expuestas.

Resultando claro lo anterior, es preciso recordar que en decisiones de esta naturaleza las partes deben ser restituidas al estado anterior (art. 1746 del CCC), esto es, tener como afiliación válida la inicial, es decir, la que tenía la demandante con Colpensiones y, como consecuencia, que la entidad que actualmente maneja su cuenta de ahorro individual: Porvenir S.A..A., debe devolver a la administradora del RPMPD (Colpensiones) todas las cotizaciones a la primera, incluyendo sus rendimientos, descuentos por cuotas de administración, seguros previsionales, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y otros deducidos, pues solo de esta manera se entiende que el restablecimiento es completo. Lo anterior deberá ser de igual manera cumplido por Protección S.A., por el período en que estuvo afiliado la demandante, salvo por obvias razones la cuenta de ahorro individual y rendimientos, porque éstos ítems no están en su poder.

En cuanto a los gastos de administración, sea del caso rememorar lo que sostiene la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema en la sentencia SL1421-2019, Rad. 56174 en la cual se dice lo siguiente:

*“Conforme a lo establecido en sede de casación, fuerza concluir entonces, que debe declararse la ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, debiendo retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban, es decir, como si ello no hubiera ocurrido, lo cual trae como consecuencia, que la actora jamás perdió el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, y de igual forma, que el Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, como en oportunidades anteriores lo ha dispuesto la Sala, pudiéndose traer a colación las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 ...”.*

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, esta misma Corporación en sentencia del pasado 29 de julio (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

*“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal (negrilla fuera de texto).*

En igual sentido puede verse la SL4803-2021 (Rad. 88879) del 20 de octubre de este año 2021, en la cual de manera expresa y directa se refirió a la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, cuotas de administración, comisiones y descuentos para los seguros de invalidez y sobrevivencia

Es de anotar, que lo dispuesto en materia de indexación también se mantendrá. Valga anotar que esta Sala de Decisión tenía el criterio de que no era procedente, pero a partir de providencia fechada el pasado 21 de abril (Radicado 05501-31-05-01-2018-00669-01, MP Dra. Nancy Gutiérrez Salazar) se modificó el mismo, debido a las reiteradas decisiones que sobre el punto ha

expuesto la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, entre las que se pueden citar: SL3034 del 7 de julio de 2021, SL 3571 del 4 de agosto de 2021, SL3708 del 18 de agosto de 2021, , SL3709 y SL3710 del 18 de agosto de 2021, SL3769 del 11 de agosto de 2021, SL891, SL 892 y SL896 del 23 de marzo de 2022, SL755 y SL756 del 9 de marzo de 2022, y SL1019 del 16 de marzo de 2022. Por tanto, sin más razones, se mantendrá esta decisión.

Con lo antes dicho, quedan resueltas las inconformidades planteadas por las apoderadas recurrentes, y lo que concierne al grado de la consulta. Se harán entonces las precisiones y adiciones correspondientes en la parte resolutive.

Las excepciones propuestas estuvo bien que no se declararan probadas: unas por no envolver hechos extintivos o modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas las de no existió ningún vicio en el consentimiento al firmar su afiliación, falta de causa para demandar, buena fe; y otras, como la de prescripción, incluyendo la que se alega para la acción de nulidad, por estar comprometido en definitiva un derecho pensional. En la sentencia inicialmente citada, se anotó:

*“Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esa vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte había adocinado que «el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la afiliación, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión».*

*Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la*

*jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo (CSJ SL8544-2016).*

En conclusión, el fallo de primer grado se habrá de confirmar, salvo en los conceptos que deben devolverse por parte de Protección S.A. y Porvenir S.A. a COLPENSIONES, punto que se adicionará, para incluir en éstos los dineros descontados por cuotas de administración, seguros previsionales y Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con la correspondiente indexación al momento del pago, el cual se deberá realizar en el señalado por la a quo.

Por último, en lo que atañe al reparo que hace la apoderada de Porvenir S.A. a la condena en costas, baste decir para mantener la decisión, que el mandato del artículo 365-1 del C.G.P. ordena la condena a quien pierde el proceso, y esta AFP resultó condenada.

Las de esta instancia estarán a cargo de las recurrentes y a favor de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de un SMLMV para cada una de ellas.


## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de apelación y consulta, salvo en cuanto a los conceptos que deberán devolverse a Colpensiones, punto que se **aclara y adiciona** en el sentido que PORVENIR S.A. deberá devolver la cuenta de ahorro individual y sus rendimientos, e igualmente ésta y PROTECCIÓN S.A. deberán también trasladar, por los períodos en que la demandante estuvo vinculado a ellas, lo deducido por concepto cuotas de administración, seguros previsionales, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás ítems, con la correspondiente indexación para el momento en que se realice el pago, tal como quedó dicho en la parte motiva.

Costas en la instancia a cargo de PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES. Como agencias en derecho se fija la suma de un SMLMV para cada una de ellas y a favor de la demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310501520190031901  
**Proceso:** Ordinario  
**Demandante:** MARIA VICTORIA PAREJA BURITICA  
**Demandado:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES  
COLPENSIONES  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 22/06/2022  
**Decisión:** CONFIRMA ACLARA Y ADICIONA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 23/06/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario